

# VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

BUENOS AIRES – 22 DE MARZO DE 2018

## REUNIÓN DE ASESORES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS

SALÓN ARTURO U. ILLIA – SENADO DE LA NACIÓN  
PRESIDENCIA DE LA SRA. SENADORA OLGA INÉS  
BRIZUELA Y DORIA DE CARA

*- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo U. Illia del H. Senado de la Nación, a las 11 y 13 del jueves 22 de marzo de 2018:*

**Sra. Presidenta (Brizuela y Doria de Cara).**- Buenos días. Muchas gracias por venir a todo el cuerpo de asesores y gracias, especialmente, a quienes nos visitan hoy.

Están aquí como invitados para informarle a nuestro cuerpo de asesores, que son quienes van a hacer la tarea técnica que necesitamos para poder avanzar con esta ley tan importante, no solo para el gobierno, sino para la Argentina y para que podamos avanzar en los objetivos que tenemos planteados.

Nos hacen el honor de acompañarnos en esta reunión de trabajo el licenciado Esteban Manuel Grecco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; el doctor Pablo Trevisán, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; el doctor José García Hamilton, jefe de Gabinete de la Secretaría de comercio de la Nación; el doctor Alejandro Bonvecchi, asesor del Ministerio de Producción; el contador público nacional Marcelo Alberto Scaglione, subsecretario, representante ante la OCDE del Ministerio de Hacienda; el doctor Juan Ignacio Carranza, asesor técnico de la OCDE del Ministerio de Hacienda y también nos acompaña el presidente de la Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina, señor Juan Airolde.

No quería dejar de venir a presentar a nuestros invitados, reiterarles las gracias por haber accedido a venir a ilustrarnos sobre temas que, a veces, resultan complejos desde el punto de vista técnico y a darnos todos los elementos que necesitamos para poder avanzar. También quiero agradecer a todos los asesores que son los que van a tener la tarea más importante en estos días que tenemos por delante.

Le voy a pedir al licenciado Grecco que por favor se haga cargo de este lugar. Yo los voy a tener que dejar por cuestiones de agenda, porque tengo que cumplir con otros compromisos y les deseo una buena jornada de trabajo.

*- Se retira del salón la señora senadora Olga Inés Brizuela y Doria de Cara.*

**Sr. Grecco.**- Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí y para nosotros desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un honor estar aquí. Este es un tema en el que venimos trabajando desde 2016, es un proyecto de reforma de la ley de defensa de la competencia y lo primero que quiero transmitir es que me parece importante este tipo de reuniones técnicas donde se pueda profundizar en todos los aspectos que hacen a la nueva legislación de defensa de la competencia y que en este sentido, la comisión, que tiene un área en la que estamos trabajando permanentemente en la optimización del marco normativo, está a disposición de ustedes para aclarar cualquier tipo de duda y profundizar en los aspectos de la propuesta de ley que está en debate.

El tema de la defensa de la competencia es un tema central, es la manera en que los países que han logrado niveles de desarrollo sostenido en el tiempo, inclusivo, con equidad y con oportunidad de progreso es la forma en que interactúan las empresas y los consumidores en los mercados y, por eso, la mayor parte de los países tienen legislaciones que protegen la competencia en los mercados, tanto para beneficiar a los consumidores en que tengan opciones de productos y servicios al mejor precio posible como para favorecer la innovación y la aparición de nuevas empresas y proteger que haya igualdad de oportunidades entre empresas pequeñas y empresas grandes, es una herramienta central que no es un tema de coyuntura, sino que es muy importante que sea una política perdurable y trascendente, que no ocupe solo a un gobierno, sino que sea una institución que permita dar certidumbre de que

las reglas de funcionamiento y de interacción entre competidores y consumidores son conocidas y aplicables y que básicamente persiguen o tienen tres tipos de herramientas la defensa de la competencia. Siempre hablo de las tres “P”. Penalizar las conductas y disuadir las conductas anticompetitivas. Es decir, el tipo de conductas o comportamientos de las empresas que puedan afectar a los mercados y no funcionen bien, que se afecte a los competidores y, sobre todo, a los consumidores. La conducta más grave que hay a nivel y que internacionalmente se toman como problemas a perseguir son lo que llamamos carteles o acuerdos colusivos entre competidores; cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir. Eso tiene como tres variantes: acuerdos de precios, se ponen de acuerdo para cobrar precios más altos de los que podrían cobrar si compitieran; repartos de mercado o de clientes, yo me ocupo de éste, vos de éste otro y no competimos entre nosotros, lo cual, nuevamente, permite mayor ganancia y perjudica a los consumidores y a la economía en general; o, también, lo que sería la colusión en licitaciones, arreglos de licitaciones que hay múltiples formas y que, incluso pueden generar perjuicios a la economía, al Estado y al erario público. Estas suelen ser las conductas más graves.

Una parte de las reformas de la legislación va dirigida a tener mejores herramientas para investigar y sancionar este tipo de conductas, ya que la legislación actual es muy débil e insuficiente en esa materia.

La segunda rama, la segunda “P”, es la prevención: evitar prácticas anticompetitivas. Para eso está lo que se conoce como el régimen de control o de análisis de fusiones y adquisiciones, lo que en la legislación se llama “de concentraciones económicas”. Cuando una empresa compra a otra o cuando hay fusiones, hay obligaciones de notificar eso al Estado y hay un organismo, la autoridad de defensa de la competencia, que tiene que evaluar el impacto de esa operación del mercado. En los casos en que esa concentración pudiera generar efectos anticompetitivos en el futuro, hay herramientas para o evitar esa operación o poner condiciones a fin de que la operación no afecte la competencia. Este es otro de los capítulos que también la ley busca reformar y mejorar. En un minuto les cuento un poco como para ser más específico.

En la tercera rama, la tercera “P”, estaría el tema de promover la competencia. O sea, sería el rol activo del Estado en promover la competencia. Es algo en lo que creo que la Argentina ha tenido un déficit en ser activo en esa materia. Hoy el tema de la política y la competencia es un tema que está entre las políticas prioritarias del gobierno.

Creo que estas tres herramientas requieren una institucionalidad que no dependa de una autoridad política de turno sino que puedan permanecer en el tiempo. En ese sentido, la legislación busca dar una institucionalidad al tema de la defensa de la competencia que trascienda una administración.

Antes de ir a los cinco o seis puntos centrales de cambio que genera esta ley, me gustaría comentarles un poco como surgió este proyecto que ya tiene media sanción de Diputados.

A principio del año 2016 empezó a haber varias iniciativas de modificación de la ley, sobre todo porque la Argentina ha sido precursor en el tema de los antimonopolios en Latinoamérica. La Argentina tuvo la primera ley antimonopolio de Latinoamérica en el año 1923; pocos años después de lo que fue la primera ley conocida a nivel internacional, que fue la de los Estados Unidos, la ley Sherman. En la Argentina, debido a la concentración que había en los frigoríficos y en algunas de las comercializaciones de época y también en las finanzas, se promovió una ley antimonopolio, que después tuvo el problema de que estaba pensada más con un esquema jurídico del tipo del que había en los Estados Unidos que del sistema jurídico argentino. Entonces, no tuvo mucha aplicación porque dependía de la justicia; es decir, no había una autoridad administrativa que se encargara de promover acciones en esta materia.

Esto da la siguiente pauta. Si uno ve los debates de aquella época, realmente comprenderá la importancia que tenía ese tema para el desarrollo del país. Desde Juan B Justo hasta legisladores de otros partidos abogaron por una ley antimonopolio. La Argentina, incluso, tuvo una de las primeras agencias de competencia y fue de las primeras que empezó a aplicar el control de concentraciones económicas. Ahora, en los últimos diez o quince años la legislación argentina quedó rezagada no solo respecto de los países más desarrollados sino de nuestros socios comerciales y vecinos de la región, como Chile, Brasil, México, Colombia y Perú. Este proyecto de ley que tiene media sanción logra poner a la Argentina en las mejores prácticas internacionales o en el contexto internacional para estar a la cabeza de las mejores prácticas internacionales.

En este proceso de formulación de este proyecto desde el Ejecutivo, desde la Comisión de Defensa de la Competencia se elaboró un borrador con lineamientos y cambios en la ley que se puso en consulta a nivel internacional, y en paralelo hubo iniciativas en la Cámara de Diputados. Las dos principales fueron las que promovieron el diputado Mario Negri y la doctora Elisa Carrió. Durante ese período, nosotros en la Comisión recibimos comentarios y sugerencias sobre las diferentes cuestiones que se plantean en un proyecto de ley de la Academia, de distintos organismos académicos especializados en la Argentina y de organismos internacionales, como la OCDE. En un rato, Marcelo Scaglione les va a comentar acerca de la relevancia que tienen las políticas y los temas de competencia para que la Argentina avance en un proceso de acceso a la OCDE.

También, recibimos aportes de la International Competition Network, que es la Red de Agencias de Competencia de todo el mundo; o sea, donde todas las autoridades de competencia del mundo se reúnen y asesoran para mejorar las prácticas y la legislación de competencia en el mundo. También, de la Asociación Internacional de Abogados, del Banco Mundial, de UNCTAD, que es la rama de las Naciones Unidas para el comercio, y de diferentes especialistas y organismos internacionales dedicados a la defensa de la competencia.

Hay una gran expectativa y un seguimiento de la comunidad internacional y de la comunidad de negocios respecto de los cambios que está habiendo en la Argentina en cuanto a la defensa a la competencia. Las publicaciones especializadas han mostrado como que el dato relevante en Latinoamérica en temas de competencia son los cambios de avance que está teniendo la Argentina, tanto por el avance que ha tenido este proyecto de ley en Diputados como también por los cambios en la aplicación de la ley actual que estamos realizando desde la Comisión de Defensa de la Competencia.

En este proceso además tuvimos la participación de diferentes bloques de la Cámara de Diputados. Es decir, a partir de estas propuestas –tanto de los diputados como las que pusimos en consulta en la Comisión con sugerencia de distintos actores internacionales–, se consolidó un proyecto unificado que fue incorporando las diferentes visiones y en el cual también hubo un aporte significativo de los distintos bloques políticos. Hemos recibido propuestas específicas tanto del bloque del partido justicialista, liderado por Diego Bossio; y del Frente Renovador, a través de Marco Lavagna, que fue quien representó las propuestas de modificación. A su vez, hemos incorporado también algunas de las observaciones y comentarios del Frente para la Victoria, propuestas por Juan Cabandié, aun cuando en la votación en general el Frente para la Victoria no apoyó.

Finalmente, el proyecto salió con una mayoría muy amplia, del orden de los 170 o 178 votos, pero si uno mira las posiciones específicas ante los distintos dictámenes no ha habido una disidencia en temas fundamentales de la ley, porque realmente es una verdadera política de Estado, es una política que necesitamos como país para poder progresar.

Entonces, es importante tener cuenta como fue la génesis de este proyecto, y les puedo comentar los principales elementos o cambios que tiene la ley. La ley actual de defensa

de la competencia tiene algunas debilidades importantes. Primero, que la ley 25.156, que es la actualmente vigente, del año 1999, sufrió diversas modificaciones. Algunas, en 2001; luego, por un decreto cuando el Ejecutivo tenía facultades para modificar; y posteriormente, una muy fundamental en 2014 con la ley 26.993.

El actual régimen tiene algunas debilidades de índole diversa. Quizás, hasta tiene invertidos los incentivos. Una ley de defensa de la competencia debe ser disuasiva, tanto en su marco normativo como en su aplicación, para desalentar que haya conductas anticompetitivas, y eso no se logra, sobre todo, cuando hay niveles de sanciones que son muy bajos y criterios inciertos de cómo se determinan esas sanciones. Las multas que hoy están en la ley están en valores del año noventa y nueve y en pesos, que quedaron desactualizadas. La multa máxima es de 150 millones de pesos, cuando eso en su momento eran dólares. Entonces, hoy ese monto es del orden de los 8 millones de dólares, que para empresas grandes o para un cartel de empresas muy fuertes es quizás, si uno hace los cálculos... Yo soy economista, no soy abogado, pero si uno hace el cálculo, el beneficio que puede obtener con una práctica anticompetitiva versus lo que tendría que pagar hasta puede ser una incitación a realizar la práctica, y de última, si tiene que pagar la multa es mucho más lo que ganó con la conducta anticompetitiva que lo que pueda perder por una sanción. Siempre, como elemento disuasivo, es importante la sanción.

Y lo otro importante es la probabilidad de que se detecten las conductas anticompetitivas, que para eso hoy la ley también tiene pocas herramientas. El proyecto de ley que aprobó Diputados tiene muchas más herramientas. Una herramienta central es lo que conocemos como el programa de clemencia o el criterio del arrepentido aplicado a empresas que estén en casos de carteles.

Entonces, por un lado la ley actual tiene pocos o desalineados los incentivos, es casi una invitación a la práctica anticompetitiva. Y del otro lado también es un obstáculo a inversiones. Porque, por ejemplo, en el control de fusiones también los niveles de facturación que se requieren para estar obligado a informar una operación de compraventa de empresa quedaron desactualizados. Con lo cual, hoy una pyme que compra un activo –puede estar comprando un inmueble, etcétera– tiene que notificar y someterse a un trámite con los costos y dilaciones que eso pueda implicar, y con los recursos que se destinan a tener que analizar ese caso cuando en realidad hay que enfocarlo en los casos más relevante. También ese es un punto en contra de esta ley.

También la ley actual tiene varias debilidades en cuanto al marco legal: las apelaciones no está claro dónde se realizan. O sea, hay más de un fuero donde se pueden realizar operaciones, lo cual da lugar a lo que se conoce como “*forum shopping*”, o sea, que las empresas puedan elegir qué juez les conviene o qué fuero les conviene más para apelar y donde tengan más posibilidad de tener éxito, cuando en realidad debería estar determinado por el marco normativo.

En ese contexto, entonces, entre los principales cambios que plantea la ley, por empezar, hay un cambio institucional. Y eso creo que es importante marcarlo, porque propone la creación de una autoridad nacional de la competencia como una autoridad independiente. Hoy la autoridad de aplicación de la ley es el secretario de Comercio, que delega en la Comisión de Defensa de la Competencia la instrucción, la investigación y la parte técnica del análisis de los casos, pero la decisión definitiva y la resolución es del secretario de Comercio, que hoy es excelente –Miguel Brown–, con quien trabajamos en equipo y realmente hemos podido reivindicar y poner a la defensa de la competencia en un primer plano. Pero no deja de ser un funcionario político, y si las sanciones del caso de conductas anticompetitivas, que tienen gran envergadura, están en una decisión de un funcionario político, eso puede dar falta de certidumbre en cuanto a la seguridad jurídica con la que se aplica la ley.

Y esto es algo que a nivel internacional ha tenido creciente importancia; es relevante que haya una independencia y una certidumbre en cómo se va a aplicar la ley, en qué casos hay sanciones y en qué casos no, y que no esté vinculado a una decisión política de turno. Y en ese sentido el proyecto de ley promueve un criterio de formación de la autoridad de competencia que va a las mejores prácticas en el sentido de que primero los miembros del tribunal... La autoridad, además, se divide como las funciones para mejorar el proceso para dar más derechos de defensa y, a su vez, para dar mayor certidumbre de que los casos tengan una aplicación y de que la ley se aplique en forma efectiva; separa las funciones de resolución o de adjudicación, lo que sería establecer multas o decisiones de aprobaciones o condicionamiento o rechazos de fusiones y adquisiciones en un Tribunal de cinco miembros, y la parte de investigación e instrucción de los casos en dos secretarías.

Este es un esquema que ha tenido diferentes formatos a nivel internacional. Si vemos el caso de Brasil y México, en las últimas reformas han hecho este tipo de división de funciones y les ha funcionado muy bien. En Chile también han dividido las funciones, aunque en organismos diferentes. Acá, dentro de un mismo organismo, que sería la autoridad nacional de la competencia: se divide en funciones entre el tribunal, que sería como una comisión de cinco miembros, y dos secretarías; una Secretaría destinada a investigación de conductas anticompetitivas –la primera de las “p” que hoy mencioné, la de sanción de conductas anticompetitivas–, y otra secretaría para el análisis de fusiones y adquisiciones –la segunda de las “p” que mencioné–. Estas secretarías serían las que realizan investigación y proponen ante el tribunal dictámenes o imputaciones que el tribunal debe resolver.

Tanto los miembros del tribunal como los de las secretarías deberían ser designados mediante un procedimiento de concurso de oposición y antecedentes, con requisitos exigentes, y con un jurado que estará conformado por los presidentes de las academias de economía y de derecho, y el procurador del Tesoro y el ministro del área. De ese concurso el jurado designa ternas para cada uno de los cargos, y de esas ternas el Poder Ejecutivo debe elegir uno de los seleccionados en la terna para ocupar la posición y remitirlo al Senado para que preste un acuerdo, para lo cual hay un plazo de sesenta días hábiles. Este, justamente, fue uno de los elementos o una de las cuestiones del proyecto que fueron modificadas a propuesta de la oposición, específicamente del bloque justicialista, liderado por Diego Bossio. Porque el proyecto original tenía un sistema diferente de designación y no tenía la participación del Senado. Esto fue un cambio que se agregó en Diputados y que creemos que va a ser algo que le dé todavía mayor independencia e institucionalidad a la autoridad.

Entonces, hay otro elemento, además: que los miembros duren cinco años, o sea que es un plazo superior al de un período presidencial, y su designación es escalonada para que no haya un cambio completo de los miembros de la autoridad en una administración. También hay reglas para la remoción. O sea, no puede haber remoción sin causa; hay reglas estrictas para la remoción. Con lo cual, creemos que este es un elemento central y que el proyecto realmente cubre esta situación.

Y creo que hay algo adicional, que pienso que es un elemento quizás más político a valorar, que es que tenemos una oportunidad donde hay un gobierno que está proponiendo un cambio en una legislación donde el gobierno va a estar cediendo discrecionalidad. Hoy el gobierno tiene las decisiones de los casos de competencia en un secretario de Estado y está cediendo ese poder de decisión en una autoridad independiente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque es la oportunidad para que la Argentina cuente con esta institución de una vez por todas.

En el año noventa y nueve se había creado un tribunal de defensa de la competencia donde también los miembros tenían que ser independientes, pero nunca ninguno de los gobiernos posteriores lo conformó; pese a que la ley había sido sancionada, ningún gobierno conformó ese tribunal durante 15 años. Y, en 2014, el cambio de la ley eliminó el tribunal y

dejó en la autoridad política la aplicación de la ley. Ese es un tema central y hace que sea una ley de todos los argentinos.

El otro tema relevante es el tema de las sanciones, el proyecto eleva las sanciones y, sobre todo, esclarece los criterios. Va a haber tres criterios para las sanciones, no solo un criterio monetario fijo en la ley sino, en primer lugar las sanciones tienen que estar vinculadas al beneficio ilícitamente obtenido por la conducta anticompetitiva o bien muchas veces es muy difícil esa estimación del beneficio ilícito porque es como un ejercicio de qué hubiese pasado si no se realizaba la conducta. Entonces, la práctica internacional es que se está recogiendo en la ley es tomar un porcentaje de la facturación de las empresas como una manera de aproximarse a ese beneficio ilícito. Entonces, por un lado está hasta el doble del beneficio ilícito o bien hasta el 30 por ciento de la facturación de las empresas en los mercados afectados por la conducta durante el tiempo que haya durado la conducta. O sea, multiplicado por los años. Y eso, con un tope del 30 por ciento sobre la facturación global de la empresa en el último año. Si uno mira la experiencia internacional las sanciones se fijan en función del porcentaje de la facturación, estos valores están entre los valores más altos de la experiencia internacional pero dentro del rango de lo que aplican las autoridades de competencia y las leyes de competencia más establecidas, de los países en donde estos regímenes funcionan bien. Finalmente, también está el criterio monetario, cuando no se puedan aplicar los criterios de beneficios ilícitos de facturación en los que también hay valores monetarios que se actualizan con lo que se llama ley de unidades móviles que son unidades que se incrementan por inflación, por el índice de precios al consumidor, es decir, se fijan las unidades móviles que hoy en el proyecto de ley están fijadas en 20 pesos. Entonces, el monto máximo de sanciones creo que está en el orden de los 200 millones de unidades móviles, serían unos 4000 millones de pesos en lo que hace a la aplicación de valores fijos. Cuando no se pueden aplicar los otros criterios, se aplican estos valores que se pueden ajustar por inflación.

Sería en el orden de los 200 millones de dólares. Este es un elemento central porque las sanciones son importantes para la disuasión y esto actualiza y pone los valores en un nivel que las empresas realmente lo consideren como para disuadirlas de prácticas anticompetitivas. La otra parte de la disuasión viene por la probabilidad de detección. No solo es importante que haya una multa o una sanción efectiva y grande, sino que también es importante que las empresas que estén pensando en incurrir en una práctica anticompetitiva prevean que pueden llegar a ser detectadas.

En ese sentido, otro de los cambios muy relevantes es la creación del programa de clemencia. El programa de clemencia es un término que habitualmente se utiliza como ley del arrepentido. Esa es la innovación más importante que ha habido en términos de defensa de la competencia en los últimos 25 años. Hoy si uno mira los carteles que se encuentran, se detectan y se sancionan a nivel internacional, por ejemplo, si uno toma la Unión Europea o Estados Unidos que son las jurisdicciones de lo más activas en la sanción de prácticas anticompetitivas más del 90 por ciento de los casos surgen de programas de clemencia.

¿Qué significa esto? Cuando hay un cartel que es la infracción más grave, como comentaba hace un rato, uno de los miembros del cartel puede acudir a la autoridad de competencia y pedir clemencia. Es decir, pedir una eximición o reducción de su sanción a cargo de aportar prueba de la existencia y de la ejecución de ese cartel que permita sancionarlo.

Entonces, se establecen una serie de criterios para que una empresa pueda presentarse e informar sobre la existencia de carteles. Los casos más recientes, por ejemplo, en Europa ha sido caso de los camiones donde han estado involucradas las principales empresas de camiones -Volvo, Scania y todas las que se les ocurran-, que fue un cartel que se descubrió que durante 14 años estuvieron acordando las condiciones de precio y funcionamiento del

mercado, la multa conjunta que puso la comisión europea llega casi a los 3000 millones de euros. Ese cartel fue descubierto por un programa de clemencia, por uno que delató. Más cerca acá, en Latinoamérica, estos programas de clemencia se empezaron a aplicar en los últimos 10 años, básicamente, pero tanto Chile, como Brasil o México han mostrado que al inicio tuvieron una aplicación incierta y luego, en los últimos 5 a 8 años han tenido una gran actividad de descubrimiento y sanción de carteles.

El caso del “Lava jato”, de los lavaderos de autos en Brasil mezcló temas de defensa de la competencia y de corrupción por Odebrecht, que fue parte de un programa de clemencia de defensa de la competencia porque justamente el “Lava jato” en portugués es un lavadero de autos. Es donde se reunían en un lavadero de autos para concertar y arreglar licitaciones. Entonces, la herramienta del programa de clemencia es muy potente para poder descubrir y encontrar cartel. En la Argentina hay un déficit en el tema de investigación y sanción de carteles en su historia. Hay un par de casos relevantes, uno es el caso del cemento que se inició por el año 99 con las denuncias periodísticas. A mí me tocó estar en la Comisión de la Competencia cuando se inició ese caso y finalmente se sancionó en el año 2005, ha sido el caso más grande de cartel el de las cementeras. Hubo otro caso de oxígeno medicinal. Pero hemos tenido muy pocos casos de carteles.

Recién en estos últimos dos años hemos reactivado la actividad anticarteles, hemos sancionado algún cartel de clínicas privadas en Salta, un cartel de farmacias en Tucumán, un cartel de sanatorios en Bariloche y estamos investigando algunos carteles a nivel nacional tanto en este sector como en otros. Pero las herramientas que tenemos para esto son limitadas y para poder avanzar y poder dar señales claras de cómo deben comportarse las empresas se requiere un cambio legislativo relevante como el que se propone en el proyecto de ley.

Un par de cuestiones más importantes que modifica el proyecto de ley es el de las fusiones y adquisiciones y un punto adicional: nosotros hemos tenido un caso muy importante en defensa de la competencia entre el 2016 y el 2017 que todavía está en proceso de definición y que ya tuvo un impacto que es el de las tarjetas de crédito y medios de pago electrónico. A partir de una investigación que iniciamos de ese mercado se inició un caso contra una de las empresas, que se llama Prisma, que tenía el monopolio de la comercialización de Visa a los comercios en la Argentina. Ese caso llegó a que las empresas se avinieran a resolverlo con una desinversión, con una venta de los 14 bancos más importantes de la Argentina y Visa Internacional, que eran los accionistas de esta empresa y que generaban una serie de problemas tanto a nivel de lo que pagan los comercios y, por lo tanto, los consumidores en los precios de las comisiones y del financiamiento al consumo, pudiéramos hacer un impacto en el mercado electrónico que sea importante donde va a haber mayor competencia y más opciones, donde el mercado va a tener un avance significativo en la innovación de nuevos medios de pago electrónico que no había en la Argentina. Para poder avanzar más fuertemente en casos como el de este tipo, se requiere una legislación y un marco normativo más estable y sólido, como el que se está proponiendo.

Esos son temas de conductas anticompetitivas que requieren una institucionalidad más fuerte, el otro tema que modifica la ley es el tema de control de fusiones y adquisiciones o el que se conoce como concentraciones económicas. La ley actual permite que las empresas informen o notifiquen una compra venta de empresas, una fusión con posterioridad a que la operación se realizó y se cerró. Eso ha llevado a algunos problemas que son que en los casos en que se estimara que esa operación puede generar un efecto negativo en la competencia, el remedio puede llegar tarde, porque si las empresas ya se fusionaron y están operando en forma conjunta, hay que desarmar lo que se fusionó que es mucho más difícil que prevenir que se realice.

El rol que tiene, en general, el control de fusiones en el mundo es preventivo. Esta es la segunda de las “P” que decía: la prevención. Por eso es que el proyecto de ley que aprobó



Diputados prevé un control previo, estrictamente previo o ex ante, a priori de las operaciones. Las empresas tienen que notificar y no pueden cerrar la operación hasta que no tienen una aprobación.

Eso exige, a su vez –y la ley lo prevé–, un régimen mucho más ágil. No puede una operación estar pendiente de aprobación durante mucho tiempo. Cuando nosotros llegamos a la comisión, en 2016, el promedio de antigüedad de los casos de fusiones superaba los 3 años. En ningún país está en esos niveles. Hoy hemos logrado reducir la cantidad de casos antiguos y los tiempos de aprobación. Creamos un procedimiento que estamos utilizando o aplicando en nuestros casos, pero que no tiene todavía el marco legal que tendría con una nueva ley. Hemos logrado bajar mucho los tiempos: el promedio de los casos más nuevos está entre los 3 y 4 meses. Hemos tenido casos de procesos simplificados, de operaciones muy insignificantes: pymes o casos donde no hay ningún efecto en el mercado. El último récord fue 5 días de nuestro dictamen.

Pero lo que requerimos es que el marco normativo le dé a la autoridad de competencia la posibilidad de que las operaciones significativas no se cierren antes de que haya un dictamen sobre si afectan o no la competencia; y, a su vez, herramientas para simplificar los trámites y evitar que se notifiquen operaciones de muy bajo impacto. Por eso, también el proyecto de ley incrementa los umbrales necesarios para notificar operaciones: se va a 100 millones de unidades móviles, que, a 20 pesos, serían 2.000 millones de pesos. Con lo cual, ya las pymes, por lo menos, quedarían fuera de la obligación de notificar. Eso reduciría, en parte, la carga administrativa de la agencia, que se puede destinar a operaciones más grandes y, sobre todo, a perseguir carteles y conductas anticompetitivas.

Un par de temas más. Yo les hablé, entonces, de la autoridad, de las sanciones, del programa de clemencia, del régimen de fusiones. Dos cuestiones más, para tomar los seis ejes centrales de cambio de la ley.

Tema apelaciones: acá se clarifica que el fuero para las apelaciones sería el Civil y Comercial Federal, y se propone la creación de una sala especializada en temas de competencia. Estos son temas muy complejos y técnicos. Hay algunos países que han tenido buenas experiencias, como es el caso de México, en las últimas reformas, con tribunales especializados. El proyecto prevé esta cuestión para tener mayor agilidad, que las sanciones o las multas no estén indefinidamente en la justicia y que se apliquen con mayor celeridad y con mayor rigor técnico.

Finalmente, tenemos el tema de los daños, la posibilidad de acciones de daños para los consumidores; o sea, que no solamente haya una sanción, sino facilitarles a los consumidores, cuando las prácticas anticompetitivas los afecten, que puedan reclamar daños ante las empresas. La ley prevé que se tomen la acción o las decisiones de la autoridad de competencia como una cosa juzgada, para que los consumidores puedan ir a reclamar daños civiles. Esta también es una manera de acercar la competencia a los consumidores, al usuario, al ciudadano. En definitiva, es lo que la Constitución en el artículo 42 nos pide: llevar la defensa de la competencia y de los consumidores y promover el bienestar general.

Esos son los ejes centrales de la reforma de la ley. Ante cualquier consulta, estamos abiertos.

**Sra. Secretaria.-** ¿Tienen alguna pregunta para el licenciado o seguimos?

– *No se realizan manifestaciones.*

**Sra. Secretaria.-** Parece que no.

Muchísimas gracias.

Invitamos al doctor Pablo Trevisán, vocal de la comisión. ¿Se encuentra?

– *No se realizan manifestaciones.*

**Sra. Secretaria.-** Invitamos entonces a Marcelo Alberto Scaglione, subsecretario, representante ante la OCDE.

**Sr. Scaglione.-** Buenos días a todos. Quiero agradecer a la comisión por esta invitación para acompañar a los equipos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del Ministerio de la Producción en este proyecto de fortalecimiento del sistema nacional de defensa de la competencia.

Voy a centrar mi intervención, luego de la explicación detallada que dio Esteban, más bien en cómo este proyecto se inscribe en el marco del proyecto de acceso de Argentina a la OCDE, que, como ustedes saben, es uno de los proyectos prioritarios del gobierno nacional. Estamos trabajando también de manera muy articulada con el Congreso, con ambas cámaras.

En primer lugar, quiero explicar rápidamente a la OCDE como un foro internacional donde se comparten las experiencias y se intercambian datos acerca de los estándares internacionales, los mejores estándares internacionales que hacen a las políticas públicas de los países desarrollados. La OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo, uno de los cuales es el Comité de Competencia, donde Argentina volvió a ingresar en el año 2016 y cuyo representante es Esteban Grecco, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, acompañado por todo su equipo.

¿Cuáles son los beneficios que tiene la Argentina al ingresar a la OCDE? Lo podemos clasificar en tres pilares. El primero, de gobernanza global, participando de esta organización internacional, a la cual no es fácil ingresar –luego explicaremos por qué–, que, como decía antes, establece las mejores prácticas para cada una de las políticas públicas, donde a través del intercambio con los países miembros se pueden compartir experiencias y se pueden acelerar los procesos de transformación.

El segundo pilar tiene que ver con el desarrollo económico y social de nuestro país en forma inclusiva y en forma durable, a través de la puesta en marcha de una serie de transformaciones destinadas a asegurar este crecimiento no por 3 o 4 años, sino durante décadas.

Y el tercero, que es el que considero más importante de todos, porque es el que le da la sustentabilidad al proceso, es el establecimiento de instituciones sólidas, que son las que permiten que este proyecto sobrepase a la gestión de un gobierno y siga como un proyecto de Estado para los gobiernos que nos siguen.

En este sentido, lo que está proponiendo la Ley de Defensa de la Competencia es el fortalecimiento de una de las instituciones claves que hacen a este desarrollo económico y social inclusivo que estamos buscando para las próximas generaciones, a través del establecimiento de una institución con nuevas herramientas –como explicaba Esteban hace un momento– para poder aplicar las mejores prácticas internacionales; y que esas herramientas permitan reforzar, como decía antes, un aspecto estratégico de la economía de nuestro país.

En este proceso de acceso a la OCDE, hay varios pasos que están descriptos ahí, que son 12. Yo los voy simplificar para poder dejar espacio a eventuales preguntas por parte de ustedes.

La primera etapa ya la iniciamos hace exactamente 20 meses, en junio de 2016, cuando se presentó la candidatura de la Argentina para ingresar a esta organización internacional.

El ingreso a la OCDE es un proyecto, como decía, muchas veces largo, difícil y complejo. En primer lugar, porque la OCDE se creó en 1961 con 20 miembros fundadores, y 57 años después, hoy, en 2018, tiene 35. Es decir que ingresaron únicamente 15 países, en 4 procesos de acceso, en más de 5 décadas.

Para eso es necesario no solamente presentar una candidatura, sino obtener el apoyo de los 35 países miembros y mostrar el compromiso no solamente del gobierno nacional, sino también de sus otros poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para enmarcarse en un proceso de transformaciones y de reformas que excedan un gobierno y que sean destinados a

establecer un camino de progreso económico y social por décadas, como han hecho los países europeos. La OCDE se creó como la segunda etapa de refundación de Europa, a continuación del Plan Marshall. Si ustedes van al edificio principal de la OCDE en París, verán que se llama "Edificio Marshall". Y el objetivo de la OCDE fue justamente dar herramientas a países que tenían el potencial de ser ricos, pero que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial.

También tenemos ejemplos más recientes, como el de Corea del Sur, que ingresó a la OCDE hace un poquito más de 20 años; hace 22, para ser exactos: en 1996 comenzó el proceso como miembro. Corea del Sur, cuando se inició la OCDE, en la década del sesenta, era un país esencialmente agrícola. Hoy, 22 años después de ser miembro de la OCDE, Corea del Sur es la onceava economía del mundo. Es el sexto exportador mundial; es un país que basa esas exportaciones en la tecnología, el desarrollo de valor agregado, en el emprendimiento. Es un país que lidera las pruebas PISA respecto del impacto de educación, que se mide en todos los países del mundo, siendo que 20 años atrás estaba en los últimos lugares. Se trata de un país que ha mejorado notablemente sus indicadores de salud. Y es un país que ha desarrollado sus instituciones, por eso la importancia de este proyecto de ley como fortalecimiento de una institución, que es la agencia de defensa de la competencia.

Luego de recibida la invitación, hoy nuestro país es el único que tiene el apoyo explícito de los 35 países miembros; pero para ingresar a la OCDE hace falta que se cierre un paquete de países en el que, de alguna manera, haya un equilibrio geográfico con otras regiones. Hoy la discusión en el seno de la OCDE pasa por ese paquete, en el cual se está avanzando.

Y una vez que se recibe la invitación, es necesario pasar el examen en 23 comités y grupos de trabajo. Es la experiencia que ha tenido Chile hace 7 años, cuando ingresó como país de la OCDE; la experiencia por la cual están pasando Colombia y Costa Rica actualmente, y es la experiencia que está trabajando la Argentina, con una participación muy importante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el Comité de Competencia de la OCDE, que, como explicaba antes, es uno de los 23 comités más importantes dentro de ese grupo de 300 comités y grupos de trabajo que tiene el organismo.

Otro punto esencial que me gustaría destacar es que, en el marco de la OCDE, la política de la competencia está en el mismo directorio junto con otras dos grandes políticas públicas que están entrelazadas entre sí: una es la política de transparencia y lucha contra la corrupción y la otra es la política de inversiones. Es decir que no son cuestiones separadas. Las cuestiones que están vinculadas con la competencia también impactan en la transparencia de un país; son cuestiones que mejoran las políticas de integridad y lucha contra la corrupción y, en consecuencia, tienen un impacto directo en el nivel de inversiones de un país. Me gustaría remarcar el hecho de que el 75 por ciento de la inversión directa extranjera en el mundo –datos al 31 de diciembre de 2016 de la OCDE– viene de los 35 países de la OCDE. Por eso es tan importante enmarcar la importancia de la política de la competencia en relación con las políticas de transparencia, de integridad, de lucha anticorrupción y de promoción y atracción de las inversiones.

También quiero darles dos datos respecto de América latina. El primero es de México. La falta de políticas de competencia en un sector específico importante, como el sector de telecomunicaciones, en 5 años, entre 2005 y 2009 –datos de la OCDE–, generó una pérdida de casi 130.000 millones de dólares, es decir, el 1,8 por ciento de su PBI. Luego de implementadas las políticas de defensa de la competencia, se permitió un aumento considerable de beneficios para los consumidores mexicanos, una baja espectacular de los precios, provocada por el fortalecimiento de sus políticas de la competencia.

Y el otro dato de América latina, también de la OCDE, es el siguiente. Esteban

hablaba hace un momento de la importancia de la lucha contra los carteles. Acá también quiero destacar que lo que se hizo el año pasado y se sigue haciendo respecto de la lucha contra los monopolios en el mercado de tarjetas de crédito es un tema que ha posicionado a la Argentina a nivel internacional, lo que se ha hecho a nivel de la Comisión de Defensa de la Competencia. Las compras públicas representan entre el 10 y el 15 por ciento del PBI de América latina. La OCDE tiene establecido que en aquellos países que no son desarrollados, en las economías subdesarrolladas, la corrupción generada por la colusión entre empresas y los acuerdos con carteles puede llegar a representar entre 20 y 25 por ciento de sobrecostos en las compras públicas. Esto, llevado a datos del PBI, representa un sobrecosto de 2 puntos y medio del PBI.

Les daba antes el impacto en el PBI de México, lo que significó la mejora de la competencia en un sector específico, el de telecomunicaciones: 1,8 por ciento del PBI. Si a eso le sumamos 2 puntos y medio de mejoras en el PBI por políticas de defensa de la competencia aplicadas a las compras públicas, estamos hablando de más de 4 puntos del PBI como consecuencia del fortalecimiento de las instituciones de la competencia y el aportar estas herramientas, que, como recién explicaba Esteban, son las herramientas que surgen de los estándares internacionales de la OCDE, que son los más importantes del mundo.

Para ir finalizando, quiero explicarles que la relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una relación que tiene nuestro país desde hace 36 años, que fue incrementándose. Comenzó en el año 1982, en el esquema de semillas, dado nuestro carácter de país agroindustrial, pero se fue desarrollando y fue incrementándose el nivel de participación de Argentina en los distintos comités de la OCDE. En estos 36 años, Argentina logró ingresar en 8 de los 23 comités más importantes y relevantes para pasar las revisiones en un proceso de acceso. Ahí pueden ver cómo hemos ido avanzando en agricultura, en comercio, en inversiones, en lucha anticorrupción, en pesca, en químicos, en política científica y tecnológica y en asuntos fiscales, al tiempo que íbamos adhiriendo a instrumentos relacionados con las inversiones, con la Convención Anticohecho, con temas de intercambio de información a fines fiscales y con gobernanza corporativa de las empresas.

Acá quiero mostrarles en forma sintética cómo hemos presentado nuestra candidatura, dado que en junio de 2016 la OCDE se encontraba cerrada. Como les explicaba, se trata de un organismo internacional donde es muy difícil ingresar –quince países en cincuenta y siete años únicamente lograron hacerlo–, y en ese momento, cuando presentamos la candidatura, teníamos el apoyo únicamente de seis países. La OCDE estaba cerrada y grandes países, como los Estados Unidos, Canadá, Japón y Alemania eran muy escépticos acerca de la posibilidad de una nueva apertura que le permitiera a nuestro país ingresar en un proceso de acceso.

En ese sentido, trabajando entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a partir de febrero de 2017, tanto con la Cámara de Diputados como con la Cámara de Senadores, desarrollamos un plan de acción donde la Argentina se comprometió ante los países miembro de la OCDE –se abriera o no una nueva oportunidad de acceso– en sesenta compromisos concretos, dieciséis políticas públicas prioritarias, una de las cuales fue la defensa de la competencia.

Estos sesenta compromisos los estructuramos en tres ejes. Uno, de mayor presencia en los comités técnicos de la OCDE. El segundo, de realización de estudios para establecer la línea de base de donde se encontraba la Argentina en ocho de las dieciséis políticas públicas prioritarias. Y en tercer lugar, de adhesión a nuevos instrumentos de la OCDE relacionados con estos estándares internacionales.

En el caso de defensa de competencia, no solamente fue una de las dieciséis políticas públicas prioritarias que establecimos sino que además se está trabajando en la línea de base

de varias cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las políticas del sector. Por ejemplo, la adhesión a instrumentos relacionados con la defensa de la competencia, donde este proyecto de ley es clave y es estratégico, y la participación –como decías antes– en el Comité de Defensa de la Competencia.

Esta actividad, junto con el conjunto de otras políticas públicas en las cuales estamos trabajando que están detalladas en esta presentación sumadas a veintiséis misiones que ha realizado la OCDE en estos veintiún meses de colaboración, hicieron que hoy la candidatura argentina –como explicaba antes– fuera la única que recibe el apoyo de los treinta y cinco países miembros.

Finalmente, quiero mostrarles como el trabajo que se está realizando en defensa de la competencia fue el segundo comité donde la OCDE nos admitió en los últimos veintiún meses. Como les explicaba antes, ingresar a OCDE es largo, difícil y complejo, pero ingresar a un comité de la OCDE también lo es, porque es como ingresar a la OCDE pero más chiquito. En este sentido, hubo que convencer a cada uno de los treinta y cinco países miembros de la importancia que representaba que la Argentina ingresara y el beneficio mutuo que le aportaba a nuestro país aprender de las mejores prácticas de los países que son desarrollados y avanzados en temas de la competencia, y también lo que la Argentina le podía aportar a los treinta y cinco países miembro de la OCDE respecto de su trabajo.

Allí es que también fue destacado todo el avance que se hizo hasta ahora en el fortalecimiento de la comisión, donde nos permitió desarrollar este trabajo conjunto de análisis de la línea de base, donde estamos respecto de las experiencias de los países más desarrollados del mundo, y trabajar junto con la OCDE en alinear este proyecto a las mejores prácticas internacionales. Y –como decía antes–, si no me equivoco, Esteban, también presentaste el trabajo que se hizo sobre todo de ruptura de grandes carteles, como el caso de empresas de crédito. Esto fue destacado como un aporte muy importante de la Argentina a la comunidad internacional de defensa de la competencia.

Quería compartir con ustedes en estos minutos por qué es importante la política de fortalecimiento de la defensa de la competencia y como esa política está enmarcada no solamente en el proceso de acceso de la Argentina a la OCDE, sino también como se vincula con otras políticas públicas que, en definitiva, hacen al desarrollo económico y social de nuestro país para las próximas décadas. Muchas gracias.

**Participante.-** Antes de finalizar, luego de las exposiciones del licenciado Grecco y del contador Scaglione, quería preguntar si alguien tiene alguna duda.

**Participante.-** Buen día.

La primera pregunta es ¿por qué los empleados de la nueva autoridad van a estar bajo la forma de la ley de contrato de trabajo y no como empleado público?

**Sr. Grecco.-** El recurso principal que tiene una autoridad de competencia son los recursos humanos. Se requiere personal muy calificado, principalmente en las materias de economía y derecho, con experiencia en negocios, empresas, mercados, y con formación en general de nivel de posgrado. Además, la contraparte, las empresas y los denunciantes y denunciados en los casos de competencia que litigan ante la Comisión, suelen ser estudios de abogados y las empresas más importantes del país. En ese sentido, se requiere poder tener personal y recursos calificados.

Entonces, la idea es que la autoridad de competencia sea un organismo descentralizado y la ley de contrato de trabajo da mayor flexibilidad y mayor posibilidad de traer recursos y pagar salarios que compitan con el sector privado para traer personal calificado al organismo.

**Participante.-** Gracias.

La segunda está relacionada con el tema de las incompatibilidades. Hay como una

especie de contradicción entre el primero y segundo inciso del artículo 19. Se le obliga a tener dedicación exclusiva y, por el otro lado, se le impide participar de estudios que estén estrictamente... Espere que busco el artículo y lo leo.

Artículo 19. El inciso b) hace referencia a “tener dedicación exclusiva” y en el inciso c), dice: “No podrán desempeñarse o ser asociados de estudios profesionales que intervengan en el ámbito de la defensa de la competencia”. O sea, si hay dedicación exclusiva, no pueden tener actividad profesional, ya que el inciso b) dice: “Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente...”.

**Sr. Grecco.-** Sí.

**Participante.-** Y el inciso c) dice: “No podrán desempeñarse o ser asociados de estudios profesionales...”.

Por lo tanto, pueden ser asociados de estudios que no tengan que ver con la defensa de la competencia y realizar una actividad que tiene una dedicación exclusiva que lo único que le permitiría es ser docente. Es contradictorio.

**Sr. Grecco.-** No diría contradictorio, en todo caso redundante... quizás...

**Participante.-** No. Contradictorio...

Y le permitiría ser...

**Sr. Grecco.-** No, no puede. Lo único que puede hacer es actividad docente.

**Participante.-** Esa es la tercera. ¿Por qué pueden tener actividad docente cuando...? Yo no soy abogado, pero una práctica que está establecida...

**Sr. Grecco.-** La actividad docente no genera conflicto de interés.

**Participante.-** Justamente. El doctor Fayt, una de sus posiciones fue que abandonó toda la actividad docente cuando fue electo miembro de la Suprema Corte de Justicia ya que él consideraba que todo juez, cuando da clases emite opinión y que las opiniones nunca son teóricas y son aplicadas a casos particulares. Entonces, por qué en un tema tan particular se permite este tipo de filtración donde los miembros del tribunal son opinión calificada dentro del ámbito académico, porque son los que ejercen justicia. ¿Por qué no se saca esa incompatibilidad?

**Sr. Grecco.-** En principio los miembros del tribunal no pueden opinar sobre casos en curso, si no estarían prejuzgando. Pero la actividad docente no implica prejuzgar. De hecho los jueces son profesores, muchos jueces y miembros del Poder Judicial y diría que estas son incompatibilidades que hoy están vigentes. Hoy como presidente de la comisión cumplo con estas incompatibilidades, pero puedo dar clase.

Obviamente, en una clase no voy a dar opinión sobre un caso que tenemos en trámite, pero sobre interpretaciones o criterios teóricos o doctrinarios eso sí se puede, si no sería demasiado restrictivo, porque además, es también una manera de favorecer el debate y la formación en estos temas. Yo no soy abogado, soy economista.

**Sr. Scaglione.-** Comparto. La idea es fortalecer la independencia que tienen que tener los miembros del tribunal y, en especial respecto del inciso de no formar parte de estudios jurídicos o consultorías en el área de defensa de la competencia. En el área de la docencia, en la Argentina, más allá de la opinión personal del doctor Fayt, que uno puede respetar, me parece que la actividad docente enriquece mucho no solamente a los miembros de un tribunal sino también a la comunidad en general por esta discusión que mencionaba Esteban. Obviamente, no se puede hablar de los casos que están en curso por motivos obvios, pero sí hay un montón de cuestiones que creo que no solamente no son incompatibles, sino que suman mayor institucionalidad a profundizar aún más aquellas cuestiones que se discuten en el marco de la academia.

**Participante.-** Una última pregunta técnica.

¿Por qué en el análisis de si una empresa debe pedir autorización no están incluidos los activos de la empresa, es decir, en el monto negociable no están incluidos los activos? Es una pregunta técnica.

**Sr. Grecco.-** ¿Cómo que no están incluidos?

**Participante.-** Está incluida la facturación, pero no los activos.

**Sr. Grecco.-** Hay dos criterios a tener en cuenta. El primer criterio es el volumen de negocios que está dado por la facturación. También hay un criterio que es el del valor de la empresa o de los activos adquiridos que podría excluir a una empresa si, por ejemplo, la empresa factura más o su volumen de negocios es mayor al que está establecido como mínimo para notificar, pero lo que adquiere es de muy bajo monto, el valor de los activos es de muy bajo monto, entonces no está obligada a notificar. Si está establecido el valor creo que es en 20 millones de unidades móviles que serían unos 400 millones de pesos, si adquiere un activo de menos de ese valor no está obligado a notificarlo, si es mayor sí. O sea que ahí el valor de los activos está computado. Lo otro es que el hecho de adquirir una empresa, no necesariamente las compras de empresas, sino también las compras de activos que impliquen unidades de negocio independientes, pueden estar sujetas a la obligación de notificar. De hecho hubo un cambio en el articulado propuesto también por la oposición, creo que fue propuesto por Diego Bossio y el bloque PJ, para aclarar y que alcance a algunas operaciones que pudieran estar en duda cuando no son compras de acciones o compras indirectas de acciones a una sociedad controlante a otro país, por ejemplo.

Pero las compras de activos, en tanto sean interpretadas como unidades de negocio independientes que tengan un cliente y flujo de ingresos están sujetas a la obligación de notificar.

**Sr. Scaglione.-** Específicamente está en el artículo 11, inciso b).

*- El participante habla fuera del micrófono y no se alcanzan a percibir sus palabras.*

**Sr. Grecco.-** Son dos criterios. El volumen de negocios es un criterio de flujos de ingresos. Es decir, de cuánto una empresa gana por año. El valor de los activos es un stock, lo que las inversiones acumuladas o los bienes de capital que tiene invertidos, el valor de los activos y cómo valorizar activos es un tema muy controversial en economía en general porque la manera de evaluarlo es el valor libros, el del balance, pero, muchas veces, el valor de libros no refleja realmente el valor económico, entonces puede estar un valor de libros muy depreciado, o sea que el valor que figura de un activo en un balance está muy depreciado y, sin embargo, tener un valor económico, porque la capacidad de generar negocios de ese activo, de esa inversión es muy grande. Y la capacidad de generar negocios se mide mejor, justamente, por el flujo de ingresos que genera. Por eso, en general, y eso si uno mira la experiencia internacional en todas las agencias ponen como requisito o umbral para notificar el volumen de negocios o la facturación que da el flujo de ingresos y no el valor de los activos porque, podrían escaparse las empresas de la obligación de notificar solo por el hecho de tenerlos subvalorados en sus estados contables.

**Participante.-** Soy Gustavo Cobo del despacho de la senadora Elías de Perez.

Dos cosas de la segunda pregunta que hacía. Cuando habla del tema de la actividad docente, más allá de la posición personal que pueda haber tenido el doctor Fayt, lo cierto es que hasta los propios miembros de la Corte Suprema y todos los jueces de la magistratura lo único que tienen habilitado es la actividad docente. Es decir, que si les quitamos eso hasta estaríamos siendo más rigurosos que para uno de los poderes del Estado.

Simplemente agregar que el inciso 6), Conflicto de Intereses en la discusión de Diputados precisamente viene a complementar esta dedicación exclusiva con el conflicto de intereses. Por decir una de las cosas que sí se habían discutido y para dejarlo lo más expreso

posible, para que no haya ninguna duda que se buscaba de la independencia de los miembros de esta autoridad. O sea que, en realidad, más que ser contradictorio, lo que hace es complementar esta dedicación exclusiva con esta prohibición, si se quiere, expresa, de la relación que pudiera tener con estos estudios profesionales que, en realidad, habilitan para que puedan intervenir eventualmente en la ley de ética pública o los conflictos de intereses.

**Participante.-** Soy Bruno Ferronato del despacho del senador Juan Mario Pais.

Tengo dos preguntas y una observación. Primero voy a hacer la observación respecto de lo que respondió sobre la ley de contrato de trabajo, creo que ahí lo que usted dice puede llegar a ser cierto, el tema de los montos salariales, pero es verdad que cuando alguien está con la ley de contrato de trabajo está con una estabilidad relativa. Usted bien aclaró que va a litigar contra grandes estudios, que asesoran a grandes empresas y muchas veces la estabilidad relativa del trabajador lo único que tiene defensa frente a un despido es el pago de una indemnización. Por lo tanto está en una posición inferior a la de un empleado público común que se rija por la ley de empleo público sin perjuicio que se puede aplicar algún otro convenio por fuera para aumentarle el sueldo si eso es lo que interesa.

Después tengo dos preguntas con respecto al texto normativo. Uno es respecto del artículo 23 del proyecto que ha venido en revisión. El artículo 23 hace lo mismo que la ley de mercados de capitales que ayer se modificó que es darle al Senado, el silencio del Senado una sanción ficta. Mandan un acuerdo y en 60 días el Senado se tiene que expedir. Ayer eso fue corregido en la ley de mercados capitales, que disponía la misma disposición, que para los casos de los miembros de la Comisión Nacional de Valores establecía que si en 60 el Senado no se expedía, lo que sucedía era que se daba por convalidada la designación, ni siquiera se hablaba de designación por comisión como el inciso 7), del artículo 99 de la Constitución, dándole al Senado un valor bastante secundario. Si van a poner al Senado para que preste el acuerdo no le tienen que poner al Senado un plazo, el Senado dará o no el acuerdo, pero en 60 días no puede ser que se le dé un plazo ficto. No existe en el derecho público argentino eso. Y, de hecho ayer se corrigió. Esa es una de las preguntas. Además, tendremos que ver si los senadores están dispuestos a cambiarlo porque ayer, expresamente, el presidente del bloque de Argentina Federal había dicho que ese era un pésimo antecedente y sinceramente viene de Diputados una ley con el mismo pésimo antecedente.

Y, después, tengo una pregunta sobre el artículo 33 que faculta a tribunal a fijar aranceles. La Corte Suprema en el fallo “Selcro”, en sus considerandos 5 y 6 establece que esa materia no la puede fijar un órgano administrativo, tienen que fijarse límites a los aranceles, los aranceles tienen que ser tasas. El fallo “Selcro” en ese caso es bastante claro.

Mi pregunta es, ¿cómo podríamos solucionar estas dos últimas preguntas? Lo de la ley de contrato de trabajo puede ser una opinión personal y hasta podemos discutirlo, pero los otros dos me parece que son obstáculos bastante complicados y me gustaría ver qué pasó en el trámite parlamentario para que llegara esta redacción. Muchas gracias.

**Sr. Grecco.-** Respecto a la observación, le aclaro que no es el único, hay varios de los entes reguladores que se rigen por ley de contrato de trabajo.

Respecto del punto del artículo 23, creo que el paralelo con la ley de mercado de capitales no es adecuado y tampoco es así que no haya antecedentes. Por ejemplo, el nombramiento de los miembros de los entes reguladores, por lo pronto el Ente Regulador del Gas tiene un proceso de aprobación tácita del Congreso.

Pero en este caso, en particular, hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, como dije antes, el proceso de selección de los miembros del tribunal es muy riguroso con un concurso de antecedentes y oposición, un jurado, la elección de una terna con posibilidad de oposición con lo cual no es una designación totalmente discrecional que propone para la aprobación. Primero, pasó por un proceso; segundo, la intervención del Senado y, de hecho,



además, esto fue parte del consenso que se discutió con el resto de las fuerzas y, como marqué antes, fue una propuesta del bloque del Peronismo Federal este artículo o la modificación de este artículo con la aprobación del Senado y el plazo tiene un sentido práctico y de efecto sobre la posibilidad de la política de competencia muy importante. Para dar un ejemplo, nosotros durante el año 2017 emitimos 300 dictámenes, más de uno por día hábil, uno y pico. Eso implica dictámenes tanto de operaciones de compraventa de empresas como de sanciones a empresas por prácticas anticompetitivas.

Y el nombramiento de las autoridades, por ejemplo, el secretario de conductas anticompetitivas o el secretario de fusiones o alguno de los miembros del tribunal que hacen que pueda dejar de funcionar el cuerpo y dejar de emitirse estos dictámenes o resoluciones, puede desde estar perjudicando a los consumidores no sancionando una conducta durante mucho tiempo y hasta deteniendo procesos de inversiones en distintos mercados porque no se pueden cerrar operaciones hasta que se defina la conformación de un tribunal. El plazo es de 60 días hábiles que es bastante razonable para prestar o no acuerdo a una designación que ya pasó por un proceso muy riguroso de análisis que duró un tiempo razonable en el cual se pudo tomar conocimiento de quiénes son los candidatos, sus antecedentes y sus opiniones.

**Participante.-** Le hago una aclaración. En el tema del ENRE no es un acuerdo, es una opinión que son dos institutos diferentes...

**Sr. Grecco.-** No, yo dije en Enargas, no el ENRE.

**Participante.-** En el Enargas, en el artículo 35 de la ley 24.076 segundo párrafo establece que no es un acuerdo, es una opinión que se le pide a las dos cámaras... No está mal, pero...

**Sr. Grecco.-** Bueno, es menos de lo que se le está dando acá. En este caso es un pedido de acuerdo. Fijate que en los entes reguladores ni siquiera se pide acuerdo. Es decir, es más exigente el criterio que se está estableciendo en esta ley.

**Participante.-** A ver si me hago entender, tal vez no me haga entender.

Me parece muy bien el procedimiento porque va a ser público y hay muchos requisitos, se quita mucha discrecionalidad, etcétera. Lo que digo es que ustedes están pidiendo que exista un acuerdo ficto, antes una opinión. No es lo mismo. La Constitución establece que el acuerdo del Senado tiene otra jerarquía. No es lo mismo que una opinión. O sea, a eso voy. Entiendo que va a ser un procedimiento y van a poder tomar conocimiento y las ONG participan según el mismo artículo 43, pero no es lo mismo un acuerdo que una opinión. Y eso lo dice el artículo 35... Perdón: artículo 55 de la ley 24.076. Me parece que estamos hablando de otra cuestión.

Con respecto a lo otro...

**Sr. Scaglione.-** Creo que es importante recalcar la diferencia que hay entre el método de designación de la ley de los miembros de la CNV, que no conozco en detalle, pero entiendo que hay diferencias sustanciales como lo mencionaba recién Esteban y también tener en cuenta que el tema del acuerdo del Senado se incorporó como propuesta de la oposición y que se le quite discrecionalidad al Poder Ejecutivo para designar a los miembros la idea es que tenga la mayor independencia posible y que el Senado tenga la palabra importante y aprobarlo y que los apruebe expresamente y, si no tiene que haber un mecanismo ficto porque, como decía Esteban, la carga que tiene hoy la autoridad es realmente enorme y parar eso esperando la aprobación expresa, es complejo. Así como dar una opinión y aprobar son cuestiones distintas, también creo que son cuestiones muy distintas los métodos de designación que preveía la ley respecto de la CNV y respecto de lo que estamos proponiendo en esta designación de miembros.

**Sr. Grecco.-** La otra pregunta era respecto del artículo 33...

**Sr. Scaglione.-** Con respecto a los aranceles, a lo que te referías con el artículo 33, tengamos presente que hoy la Comisión nacional de Defensa de la Competencia es un órgano

---

desconcentrado en el ámbito en el que está, estamos proponiendo ir a un orden autárquico, descentralizado, no va a ser plenamente autónomo y existen antecedentes en la Argentina de organismos que cobran ciertos aranceles. Acá es simplemente para gastos ordinarios, por ejemplo la IGJ y tienen aranceles timbrados...

*- El participante habla fuera del micrófono y no se alcanzan a percibir sus palabras.*

**Sr. Scaglione.-** Entiendo que te referiste al antecedente de la Corte Suprema y es verdad, es correcto lo que decís.

**Sr. Grecco.-** Igual fijate que está acotado al Capítulo 3 de la ley, que es el control de fusiones y adquisiciones. Las empresas que, además, están fijando umbrales, las operaciones que se van a tener que notificar son las operaciones significativas; en un proceso de compra venta de empresas, lo que llaman el *due diligence* de una empresa, los montos de gastos, incluso en honorarios de abogados, son muy importantes, acá y en general en todos los países tienen un arancel para que no sea el tesoro exclusivamente el que esté financiando la actividad de la comisión, sino que en esta actividad las empresas que están en operaciones millonarias contribuyan.

¿En qué orden están estos aranceles? Depende de los países, pero están en el orden de los 10.000 dólares por operación cuando son operaciones de cientos y miles de millones de dólares y seguramente los honorarios de abogados y consultores son mucho más que eso. No es algo que afecte a la operación en sí, si las operaciones son significativas y no es algo que pueda ser considerado un tributo o algo así que esté lesionando algún derecho, sino que es una tasa que cubre los costos de trámite de la autoridad.

**Sra. Secretaria.-** ¿Alguna otra pregunta?

*- No se realizan manifestaciones.*

**Sr. Grecco.-** Muchas gracias a todos. Quedamos abiertos a cualquier consulta adicional que tengan cuando entren en el detalle del análisis del proyecto en la comisión.

*- Se da por finalizada la reunión a las 12 y 40.*